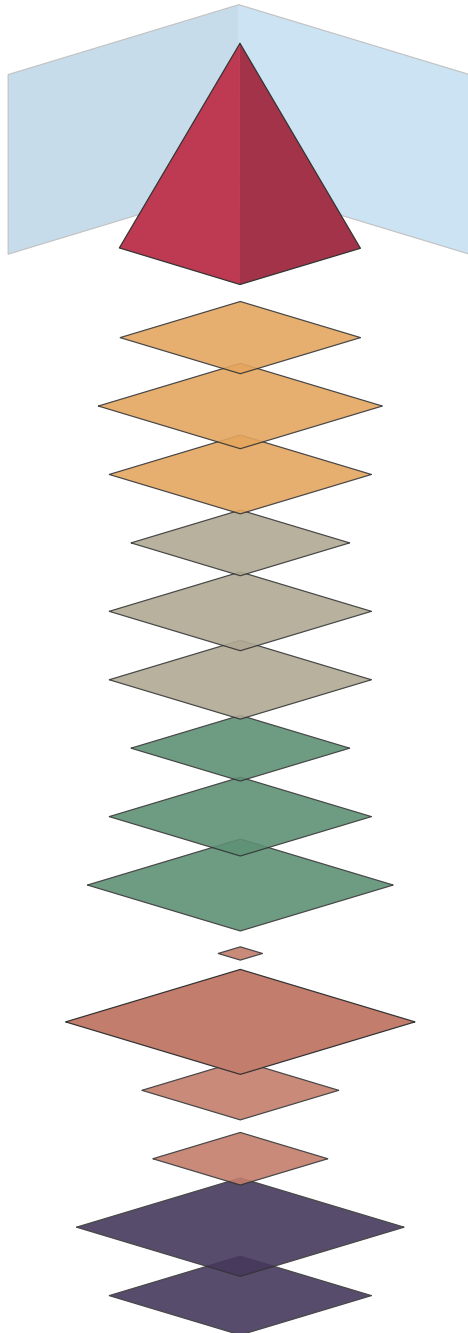




COSTA RICA



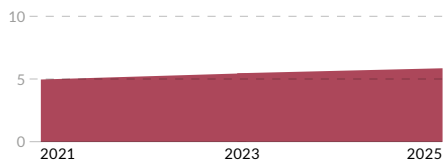
5.90 $\nearrow 0.37$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

58.º de 193 países $\nearrow 14$

13.º de 35 países americanos $\nearrow 4$

5.º de 8 países de América Central $\nearrow 2$



MERCADOS CRIMINALES 5.60 $\nearrow 0.23$

TRATA DE PERSONAS 5.50 $\nearrow 0.50$

TRÁFICO DE PERSONAS 6.50 $\nearrow 0.50$

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 6.00 0.00

TRÁFICO DE ARMAS 5.00 0.00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 6.00 $\nearrow 0.50$

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 6.00 0.00

DELITOS CONTRA LA FLORA 5.00 0.00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 6.00 0.00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 7.00 0.00

COMERCIO DE HEROÍNA 1.00 0.00

COMERCIO DE COCAÍNA 8.00 $\nearrow 0.50$

COMERCIO DE CANNABIS 4.50 0.00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 4.00 $\nearrow 0.50$

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 7.50 $\nearrow 0.50$

DELITOS FINANCIEROS 6.00 $\nearrow 0.50$



ACTORES CRIMINALES 6.20 $\nearrow 0.50$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 8.00 $\nearrow 1.00$

REDES CRIMINALES 6.00 0.00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 3.50 $\nearrow 1.00$

ACTORES EXTRANJEROS 7.50 $\nearrow 0.50$

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 6.00 0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos

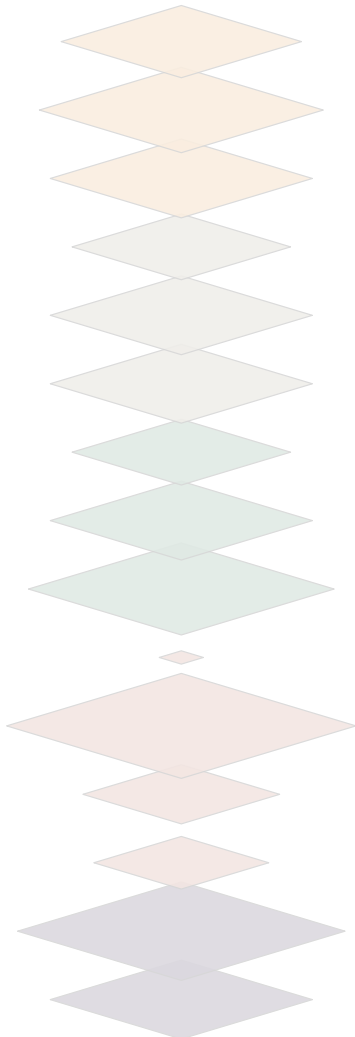
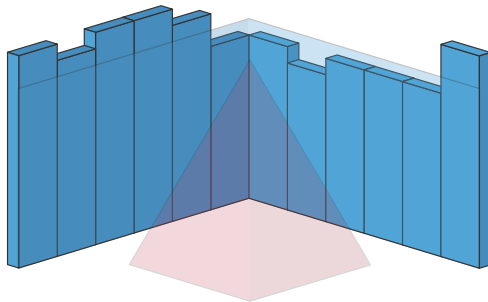


Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



COSTA RICA



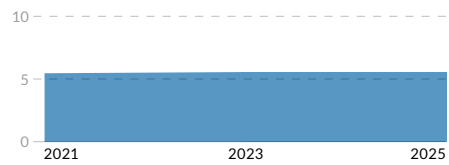
5.63_{0.00}

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

47.º de 193 países ↗3

7.º de 35 países americanos -

1.º de 8 países de América Central -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6.50	↘0.50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6.00	↘0.50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6.50	0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6.50	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6.00	0.00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5.00	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4.50	↗0.50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5.00	↗0.50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.00	0.00
PREVENCIÓN	5.00	0.00
ACTORES NO ESTATALES	6.50	0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. Los migrantes vulnerables, procedentes de América Central, las islas del Caribe, China y América del Sur, suelen ser blanco de los traficantes, y muchas de las víctimas al final son trasladadas a Estados Unidos. El país también recibe a víctimas procedentes de Colombia, Venezuela, Nicaragua y la República Dominicana, que se destinan a la prostitución, el servicio doméstico y el trabajo agrícola. El turismo sexual infantil, especialmente en zonas como Jacó, sigue siendo un motivo de gran preocupación, ya que la demanda internacional alimenta la explotación de menores. Las personas pertenecientes a grupos minoritarios, en particular las transgénero, a menudo son obligadas a ejercer la prostitución, a través de los traficantes, que recurren a las redes sociales para atraer y controlar a las víctimas. Al parecer, para presionar a sus víctimas, los traficantes las amenazan con revelar información personal. Cada vez preocupa más la explotación laboral en la agricultura, ya que los trabajadores están sometidos a condiciones muy duras y tienen pocas posibilidades de escapar. Además, las organizaciones criminales obligan a las personas sin hogar a introducir drogas de contrabando en las prisiones. Según los informes, se utiliza a los niños para transportar sustancias ilícitas o para cometer delitos violentos, lo que los expone a las redes de trata. Costa Rica también ha sido identificada como un lugar de tráfico ilícito de órganos y está demostrada la participación del personal médico y de los operadores turísticos en delitos relacionados con los trasplantes. A pesar de la falta de investigaciones oficiales recientes, es posible que siga habiendo redes de tráfico de órganos.

El tráfico de personas es un problema importante, ya que Costa Rica es un país tanto de tránsito como de destino. Los migrantes procedentes de Venezuela, Haití y Ecuador atraviesan Costa Rica para llegar a América del Norte, mientras que otros, como los nicaragüenses y los colombianos, llegan para trabajar o como turistas. La principal ruta de tráfico del país se extiende desde Panamá hasta Nicaragua. Las redes de tráfico utilizan servicios de transporte formales e informales y a menudo cuentan con la ayuda de facilitadores locales, conocidos como «talibanes», para no pagar los aranceles fronterizos. Los recientes acuerdos conjuntos entre Costa Rica y Panamá han formalizado las rutas de tránsito, lo que limita la capacidad de los migrantes para permanecer en el país. Sin embargo, sigue habiendo inseguridad y se han registrado varias muertes de migrantes durante el tránsito. En el 2024, las autoridades costarricenses desmantelaron una importante red de tráfico de migrantes que operaba entre Ecuador y Estados Unidos, cobraba tarifas elevadas a los migrantes y utilizaba rutas de transporte complejas.

La extorsión y los cobros ilegales por protección están aumentando en Costa Rica. El sistema de préstamos gota a gota, que consiste en préstamos informales con altos intereses, se ha generalizado y, según los informes, ha afectado a cientos de miles de costarricenses. La extorsión a través de las redes sociales y las telecomunicaciones también son frecuentes y los criminales amenazan o se hacen pasar por familiares secuestrados. Las organizaciones criminales han comenzado a exigir «impuestos» ilegales a las empresas, especialmente en San José y en Cartago, donde se ha intensificado la violencia contra las víctimas. Los grupos delictivos dedicados a la extorsión han atacado a agentes de los cuerpos de seguridad, lo que demuestra aún más sus tácticas violentas.

TRÁFICO

El tráfico de armas es un problema grave, ya que en Costa Rica la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. El país es un lugar de destino y de tránsito de las armas ilícitas, procedentes sobre todo de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. Los grupos delictivos adquieren armas, como AK-47 y AR-15, para facilitar su participación en el tráfico de drogas. Se siguen incautando muchas armas de fuego ilícitas, pero menos del 5 % de las armas utilizadas en los homicidios son legales. La relación entre el tráfico de armas y el aumento de la violencia se refleja en el creciente índice de homicidios del país.

El comercio de productos falsificados está aumentando rápidamente en Costa Rica, donde aparecen productos como fertilizantes, calzados, artículos de higiene y ropa que imitan diversas marcas muy vendidas. Parece que las falsificaciones han ganado aceptación social y se estima que el mercado ilícito representa alrededor del 2 % del PIB. Aparte de las consecuencias económicas, el comercio plantea graves riesgos para la salud, sobre todo porque los productos farmacéuticos falsificados, que se triplicaron en el 2023, dominan el mercado, a menudo procedentes de Nicaragua. El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como el alcohol y los cigarrillos, es un mercado floreciente. Los cigarrillos de contrabando, en su mayoría procedentes de Panamá, Paraguay y China, representan casi la mitad de los que se consumen en el país. Las pérdidas de ingresos públicos derivadas de este comercio ilícito son considerables y la venta de artículos de contrabando está ampliamente aceptada por los consumidores.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora, en particular la tala ilegal, están muy extendidos. Según los informes, la mayoría de las denuncias por delitos ambientales de Costa Rica están relacionadas con la extracción ilegal de madera y hay especies, como el

cocobolo y el chilamate, que son objeto de un intenso tráfico hacia China. Los reguladores forestales corruptos facilitan este comercio ilícito y la deforestación sigue siendo una amenaza para la biodiversidad. Los delitos contra la fauna son muy frecuentes y Costa Rica es uno de los principales países de origen del tráfico de especies silvestres. Algunas, como las ranas de cristal, las mariposas y las aves, se contrabandean a América del Norte y a Europa para el comercio de mascotas exóticas, mientras que las tortugas marinas y los tiburones martillo son objeto de caza por su valor comercial. Las plataformas en línea y las redes de tráfico de drogas facilitan el tráfico de especies silvestres, lo que complica aún más los intentos de aplicar la ley.

Los delitos contra los recursos no renovables, en particular la minería ilegal del oro, siguen siendo un problema importante y la mina de Crucitas es un punto focal de la actividad ilícita. Los migrantes nicaragüenses se dedican a la extracción no autorizada de oro, lo que provoca una grave contaminación ambiental, por el uso de mercurio. Las autoridades han tenido dificultades para controlar el problema y las operaciones mineras ilegales han seguido creciendo. Según los informes, los mineros artesanales ahora se están dirigiendo a otras áreas protegidas, lo que agrava el daño ambiental.

DROGAS

Costa Rica no tiene un mercado consolidado de heroína, ya que la demanda local sigue siendo baja y el país no se considera un centro del comercio internacional de esta droga. Sin embargo, es un centro de tránsito clave para el tráfico de cocaína y hay envíos que llegan desde Colombia, pasando por Costa Rica, hasta Estados Unidos y Europa. Los cárteles mexicanos y colombianos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, desempeñan un papel central en las operaciones de tráfico. Las incautaciones de cocaína han fluctuado. A pesar de la intensificación de los esfuerzos de interdicción, las redes de tráfico siguen evolucionando y emplean métodos avanzados de ocultación, como el contrabando de drogas en envíos de fruta y de café. El aumento del consumo de cocaína en Costa Rica ha exacerbado aún más la violencia y la mayoría de los homicidios están relacionados con el tráfico de drogas.

El comercio de cannabis está bien asentado y Costa Rica actúa como país de origen, tránsito y destino. Aunque existe un cultivo local, la mayor parte del cannabis se trafica desde Colombia y es almacenado por bandas costarricenses, antes de ser distribuido localmente o exportado. Las incautaciones de cannabis y de productos relacionados siguen siendo altas y el panorama legal en torno a su consumo sigue influyendo en el mercado ilícito.

Cada vez llegan a Costa Rica más drogas sintéticas, como la MDMA, el LSD y la ketamina, procedentes de Europa mediante envíos postales. La aparición del fentanilo en el país ha suscitado preocupación y las autoridades han desmantelado algunas redes de tráfico de fentanilo en los

últimos años. Los jóvenes consumidores de los barrios nocturnos y las zonas turísticas son los principales objetivos de la distribución de drogas sintéticas.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

La ciberdelincuencia es un mercado en rápido crecimiento en Costa Rica. El país se ha visto muy afectado por los ataques de ransomware, que suelen tener como objetivo las instituciones gubernamentales. Los ciberdelincuentes utilizan mensajes engañosos y malware para desbaratar las operaciones comerciales. Según los informes, las denuncias por ciberdelitos han aumentado drásticamente en los últimos años.

DELITOS FINANCIEROS

Costa Rica tiene un mercado de delitos financieros bien establecido, que incluye la evasión fiscal, el robo de identidad y el fraude en línea. Las organizaciones criminales emplean técnicas como las estafas de loterías falsas y los cheques falsificados para defraudar a particulares y a empresas. También se han vuelto comunes las estafas generadas por inteligencia artificial que suplantan la identidad de figuras públicas. Son recurrentes las transacciones financieras sospechosas, vinculadas a múltiples sectores económicos, como el inmobiliario y el comercio local. Las estafas han provocado pérdidas multimillonarias y los casos internacionales en los que han participado actores costarricenses han puesto de relieve el papel del país en las redes mundiales de delitos financieros.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado en Costa Rica ha crecido considerablemente y hay miles de personas vinculadas a las organizaciones criminales, que han pasado de 35 a 340 en la última década. Los grandes grupos, como Los Picudos, Carryway y La Narco Familia, compiten por el control del tráfico de drogas en barrios violentos de San José, como La Carpio y Pavas. La banda del Diablo, actualmente la más poderosa del país, domina el tráfico de cocaína, la extorsión y los asesinatos por encargo y tiene influencia en todo el país y vínculos documentados con agentes de la Policía corruptos. Las autoridades temen que, al intensificarse el tráfico de drogas, surja un «megacártel». Si bien algunos grupos, como Los Moreco, se han debilitado tras la detención de sus líderes, otros persisten y operan desde la cárcel o se reorganizan con líderes nuevos.

Las redes criminales de Costa Rica han establecido fuertes vínculos transnacionales, especialmente para el tráfico de drogas. Muchos de estos grupos colaboran con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo de Colombia, facilitando el transporte de cocaína mediante el suministro de apoyo logístico, como combustible y lanchas motoras. Además, algunas redes operan en el sector de la ciberdelincuencia

y se dedican al fraude financiero, el robo de identidad y los ataques de ransomware. La creciente presencia de redes criminales en múltiples sectores ha contribuido al aumento de los niveles de violencia, ya que los grupos recurren a la coacción psicológica y a la física para mantener el control. En los últimos años también se han descubierto redes de tráfico de órganos, a menudo vinculadas a personal médico corrupto, lo que subraya aún más la complejidad del panorama criminal de Costa Rica.

A pesar de los compromisos públicos para combatir el crimen organizado, Costa Rica se enfrenta a retos relacionados con la corrupción de los actores integrados en el Estado. Las investigaciones sobre corrupción han revelado conductas indebidas sistémicas dentro de las instituciones estatales y hay múltiples funcionarios de alto perfil implicados en irregularidades financieras y en la malversación de fondos públicos. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha identificado una corrupción significativa en casi todas las instituciones estatales, aunque se ha podido reducir la cantidad de casos pendientes acumulados. En el 2024 se acusó al presidente de tratar de sobornar al presidente del Congreso, lo que dio lugar a una investigación en curso por parte de la Fiscalía. Además, los casos de fraude financiero a gran escala, como la desaparición de casi 6 millones de dólares del banco nacional y las licencias de construcción irregulares, ponen de manifiesto las profundas vulnerabilidades de las estructuras estatales.

Los actores extranjeros están cada vez más activos en Costa Rica, especialmente en el tráfico de drogas y en el de armas. Los cárteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, colaboran con los grupos locales, mientras que el Clan del Golfo de Colombia domina el tráfico de cocaína, junto con los restos de las FARC. Estos

grupos también suministran armas a las bandas locales, lo que alimenta la violencia e incrementa los homicidios. Hay informes que registran la presencia de la 'Ndrangheta italiana y los esfuerzos de expansión de la MS-13, tras las medidas represivas en El Salvador. Se han identificado grupos venezolanos, como el Tren de Aragua, entre los migrantes, lo que suscita preocupación por el contrabando y la extorsión. Aunque no se ha confirmado que haya vínculos directos con altos funcionarios, las autoridades destacan que puede haber relaciones entre figuras políticas locales y los cárteles internacionales. La información financiera también destaca transacciones sospechosas, en las que han participado actores de Nicaragua, Colombia y Estados Unidos, lo que sugiere la existencia de actividades delictivas transnacionales en el sistema financiero de Costa Rica.

El sector privado de Costa Rica desempeña un papel importante para facilitar el crimen organizado, especialmente en cuanto a los productos ilícitos sujetos a impuestos especiales y los delitos financieros. Para lavar dinero se suelen utilizar algunos sectores, como la construcción, el inmobiliario y la hostelería, y los traficantes invierten en negocios legítimos para ocultar los fondos ilícitos. El contrabando de cigarrillos y el de alcohol siguen estando muy difundidos y hay más de 100 puntos de venta al por menor en San José, sospechosos de evasión fiscal y de ventas ilegales. Destaca un caso que reveló una red que blanqueaba las ganancias de la droga a través de tiendas de neumáticos, bares y restaurantes, lo que pone de relieve que las empresas legítimas pueden servir de tapaderas para la delincuencia. A pesar del endurecimiento de las normas financieras, el sector privado sigue siendo vulnerable a la evasión fiscal, la malversación y el fraude.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno de Costa Rica se ha comprometido públicamente a luchar contra el crimen organizado, pero sus esfuerzos han sido criticados. Los dirigentes actuales han impulsado reformas, como una revisión de la Ley contra el Crimen Organizado, para reforzar los tribunales especializados que se ocupan de los casos relacionados con las organizaciones criminales. Sin embargo, los partidos de la oposición sostienen que la administración carece de medidas eficaces para contrarrestar el aumento de la violencia relacionada con las drogas. Ha surgido una controversia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en la cual cada uno atribuye a los otros la responsabilidad del aumento de la delincuencia. El presidente actual ha criticado con frecuencia al Poder Judicial y al Congreso por no haber logrado frenar

la criminalidad, mientras que la eficacia de las medidas gubernamentales sigue sin estar clara. Los informes también indican que algunos alcaldes y congresistas tienen vínculos con las organizaciones criminales, lo que complica aún más la gobernanza. A pesar de los retos, Costa Rica se considera un país plenamente democrático, con un marco sólido de gobernanza. Sin embargo, las investigaciones en curso sobre tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder perjudican la credibilidad del Gobierno. Aunque el país mantiene unos indicadores de gobernanza sólidos, las limitaciones de la capacidad institucional impiden la coordinación eficaz necesaria para combatir el crimen organizado.

Costa Rica cuenta con un marco jurídico sólido para combatir la corrupción, que incluye la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y una oficina anticorrupción de larga trayectoria. Las iniciativas de transparencia han dado lugar a altas calificaciones en materia de transparencia administrativa y presupuestaria y los esfuerzos de gobernanza digital gozan de reconocimiento internacional. Entre las recientes iniciativas anticorrupción figura la aprobación de la Ley Integral contra la Corrupción, que protege a los denunciantes, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, persisten algunas deficiencias, en particular en lo que respecta a los requisitos de divulgación de la información financiera para los funcionarios públicos y la transparencia en los permisos de minería y de infraestructuras. La investigación en curso sobre las acusaciones de soborno que involucran al presidente ha puesto aún más de relieve las vulnerabilidades existentes en materia de gobernanza. Aunque el Gobierno sigue asignando recursos para combatir el crimen organizado, la corrupción en múltiples niveles ha obstaculizado la aplicación efectiva de la ley y su regulación. El proyecto de ley Jaguar, que pretende reducir las facultades de supervisión de la Contraloría General, ha sido criticado, porque podría suponer un retroceso en los esfuerzos contra la corrupción.

Costa Rica participa activamente en los esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado. El país ha ratificado acuerdos internacionales claves, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y múltiples tratados de extradición con países como Estados Unidos, México y Colombia. Existen acuerdos bilaterales para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero con Argentina, Chile, Panamá y otros socios regionales. Estados Unidos es el principal apoyo externo de Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado y recientemente ha proporcionado fondos para mejorar la infraestructura digital destinada a la lucha contra el narcotráfico. Además, Costa Rica ha reforzado su cooperación con la UE para combatir el tráfico de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha establecido una presencia permanente en Costa Rica, para ayudar a mejorar la seguridad fronteriza, que incluye la instalación de escáneres en los principales puntos de entrada. A pesar de estos avances positivos, Costa Rica sigue siendo vulnerable al crimen organizado transnacional. La cooperación del país con sus vecinos regionales, como Panamá y Nicaragua, se ha centrado en la mejora de la seguridad fronteriza, pero siguen existiendo retos en la gestión de las rutas de contrabando y el comercio ilícito.

Costa Rica ha promulgado diversas leyes para combatir el crimen organizado, como la Ley contra el Crimen Organizado, las leyes contra la trata de personas y las normativas sobre los estupefacientes. Se ha aprobado una estrategia nacional para combatir los retos en materia de seguridad pública, pero persiste la preocupación por la eficacia de su aplicación. Una reciente reforma legislativa tiene por objeto reforzar los tribunales especializados que se ocupan de los casos de crimen organizado y se acaba de promulgar una ley sobre

los planes de préstamos extorsivos. Sin embargo, Costa Rica aún no ha adoptado una ley de decomiso similar a las de Panamá y Colombia, que podría contribuir a dismantelar las redes criminales transnacionales. Además, los retrasos en los procesos legislativos han impedido que se introdujeran nuevas reformas. Actualmente se está debatiendo una propuesta de enmienda constitucional que permitiría la extradición de ciudadanos costarricenses involucrados en el tráfico de drogas, lo que refleja la intención de fortalecer los marcos jurídicos contra el crimen organizado.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Costa Rica funciona de forma independiente y respeta las normas de los juicios justos, pero persisten los retrasos en la tramitación de las causas penales. El sistema penitenciario sufre un grave hacinamiento, con instalaciones que albergan a 15 000 reclusos, aunque tengan una capacidad máxima de 13 000. Las denuncias de torturas y la financiación insuficiente de las prisiones han puesto aún más de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario. Si bien se ha implantado un mecanismo de supervisión de la violencia en las prisiones, sigue siendo difícil garantizar a los reclusos unas condiciones humanitarias.

Los principales cuerpos de seguridad de Costa Rica son la Agencia de Investigación Judicial, que se ocupa de los delitos graves nacionales y transnacionales, y la Policía Nacional, responsable de la vigilancia en general. La Policía Nacional también cuenta con unidades especializadas, como la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y las unidades especiales de intervención, diseñadas para hacer frente a amenazas específicas, como el tráfico de drogas y los delitos relacionados con las fronteras. A pesar de este marco institucional, Costa Rica se sigue enfrentando a importantes retos en la lucha contra el crimen organizado. La persistente escasez de recursos y de personal reduce la capacidad de la Policía Nacional para responder eficazmente al crecimiento de los mercados criminales, en particular el tráfico de drogas y la consiguiente violencia. Si bien la confianza de la población en los cuerpos de seguridad sigue siendo relativamente alta, estas limitaciones han restringido la eficacia general de las iniciativas policiales. Como respuesta, el Gobierno ha propuesto una importante ampliación de la fuerza policial, con el objetivo de incorporar hasta 9 500 agentes. Para complementar estas iniciativas, se han puesto en marcha operaciones específicas, como el «Operativo Pacífico», en zonas propensas a la violencia, como Puntarenas, para desarticular la actividad de las bandas y reducir la delincuencia.

La estratégica situación geográfica de Costa Rica, que limita con Nicaragua y con Panamá y está flanqueada por el mar Caribe y el océano Pacífico, la convierte en un lugar de tránsito clave para diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el contrabando de recursos no renovables y las rutas del tráfico de personas utilizadas por los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, que a menudo pasan por la

región costarricense de Limón, una zona conocida por sus altos niveles de violencia. En respuesta al crecimiento de los mercados del contrabando, Costa Rica ha puesto en marcha varias iniciativas de gestión fronteriza, como el Centro de Control Integrado y el Programa de Integración Fronteriza, que pretenden modernizar la infraestructura fronteriza y mejorar el control de los movimientos transfronterizos. La Policía de Fronteras supervisa la seguridad de los puertos, mientras que las autoridades aeroportuarias se centran en la prevención del tráfico, en particular de especies silvestres. Costa Rica también colabora con Panamá en un sistema compartido de control fronterizo, para agilizar el registro de migrantes y mejorar la supervisión de las importaciones procedentes de Asia y de Europa. Además, está trabajando con Nicaragua para abordar los puntos de cruce informales y reforzar la seguridad de la frontera norte. En el 2023, la UNODC estableció su primera oficina permanente en Costa Rica, a fin de instalar sistemas de escaneado en todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, para combatir el crimen organizado transnacional. Mientras tanto, Costa Rica sigue siendo vulnerable a las amenazas cibernéticas. Tras el ataque de ransomware Conti en el 2022, el país ha seguido sufriendo ciberataques, como los incidentes recientes contra el Ministerio de Salud, lo que subraya la necesidad de reforzar la infraestructura digital y las medidas de ciberseguridad.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Costa Rica cuenta con un sistema bancario sólido que cumple con las regulaciones internacionales, pero sigue siendo un centro internacional de lavado de dinero. A pesar de las múltiples leyes de lucha contra el lavado de dinero y de las instituciones de supervisión, las condenas por delitos financieros siguen siendo bajas. En el 2024, Costa Rica volvió a figurar en la lista gris de la UE por evasión fiscal, aunque los organismos mundiales de supervisión financiera reconocen que han mejorado las medidas para luchar contra el lavado de dinero.

Costa Rica posee un entorno económico generalmente favorable, que se caracteriza por un crecimiento constante y una fuerte inversión extranjera directa y es uno de los principales motores de su economía. No obstante, persisten algunos retos, como los elevados costes operativos, la complejidad de su marco jurídico, las deficiencias en las infraestructuras y los problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la segmentación del mercado laboral. La agenda de desarrollo del Gobierno para 2023-2026 da prioridad a la recuperación, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, pero las ineficiencias burocráticas y las limitaciones políticas dificultan el progreso. Aunque la economía muestra resiliencia, el PIB aún no se ha recuperado por completo hasta los niveles previos a la pandemia. Cabe destacar que el sector privado ha

tomado medidas para combatir el crimen organizado, con iniciativas como la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, que promueve la responsabilidad corporativa para abordar estos retos.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Costa Rica ha establecido dos mecanismos principales de apoyo a las víctimas y los testigos de delitos: la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, que depende de la Agencia de Investigación Judicial, y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, que depende de la Fiscalía General de la República. Estos organismos brindan protección y atención a las personas involucradas en procesos judiciales, especialmente a aquellas que se enfrentan a amenazas o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Cabe destacar que el programa de protección experimentó un fuerte aumento en el número de casos, lo que pone de relieve la creciente demanda de servicios de protección. A pesar de estos esfuerzos, la falta de financiación sigue siendo un obstáculo clave para ampliar y fortalecer los sistemas de apoyo a las víctimas, en particular en los casos de trata. Las iniciativas de prevención del país incluyen programas dirigidos a las comunidades, los jóvenes y el sector comercial, a fin de promover la sensibilización sobre la criminalidad y la colaboración con la Policía. Además, la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas lidera campañas públicas para desalentar la participación en estos mercados criminales. En las evaluaciones internacionales se reconocen los esfuerzos del país en la lucha contra la trata de personas y han aumentado los recursos destinados a los programas de prevención, entre otros, aunque no alcanzan los máximos estándares. El enfoque de Costa Rica en materia de política de drogas también ha recibido evaluaciones diversas. El país muestra un éxito moderado, pero aún se queda corto en ámbitos como la reducción de daños, el apoyo a los consumidores de drogas y la proporcionalidad de la justicia penal. Los actores no estatales, como las organizaciones de derechos humanos y las instituciones de investigación, desempeñan un papel activo en la lucha contra el crimen organizado. Costa Rica mantiene una sólida protección de la libertad de prensa y los medios de comunicación informan con frecuencia sobre la delincuencia y la corrupción. Sin embargo, las tensiones entre el Gobierno y los periodistas críticos se han intensificado y se acusa al Estado de acosar a los reporteros. También se ha criticado al Gobierno por reducir el apoyo a los movimientos de derechos humanos y, sobre todo, a los grupos que defienden a las personas LGBTQI+.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.